



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
PROCESO: ORDINARIO LABORAL -SEGURIDAD SOCIAL
(CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA).

DEMANDANTE: SALVADOR SUAREZ DIAZ .

DEMANDADO: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL y PORTUARIO DE BARRANQUILLA y DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES DE BARRANQUILLA.

RADICACIÓN: 08-001-31-05-013-2010-00077-01.

INFORME SECRETARIAL:

Señor Juez, a su Despacho el presente proceso, informándole que frente al auto del 31 de agosto de 2.022, notificado por estado al demandante, el 2 de septiembre de 2.022, el cual libró mandamiento de pago contra las demandadas por concepto de pensión proporcional de jubilación convencional a partir del 12 de julio de 2009 a octubre de 2018, reajuste de indemnización por despido convencional, debidamente indexada, más las costas procesales, se abstuvo de decretar medidas cautelares, notificar personalmente a la demandada y correrle traslado por el término de 10 días de la solicitud de cumplimiento de sentencia, la apoderada judicial del demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación el día 5 de septiembre de 2.022. Por su parte, la demandada DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES en memorial del 6 de septiembre de 2.022, expresó que los embargos no deben ser aplicados a las cuentas aperturadas por la DDL como ente autónomo, sino a las cuentas correspondientes a la entidad extinta y que sea demandada en cada proceso judicial, e igualmente, el 6 de septiembre de 2.022 también interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el referido mandamiento de pago, además de contestar la demanda de cumplimiento de sentencia y proponer excepciones de mérito el 16 de septiembre del mismo año. Respecto a la demandada DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, le informo que igualmente interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el mandamiento de pago el día 13 de septiembre de 2.022, y también contestó la demanda de cumplimiento de sentencia proponiendo excepciones de mérito. De los recursos interpuestos se corrió traslado a las partes, mediante fijación en lista del 10 de marzo de 2023, ante lo cual le informo que la parte demandante descorrió el traslado. Finalmente, es de anotar que los términos judiciales estuvieron suspendidos por tres días hábiles correspondientes a los días 2, 3 y 4 de mayo de 2.023, así como los días 26, 27 y 28 de junio del presente año, con ocasión al cierre extraordinario ordenado con el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico mediante los Acuerdos No CSJATA23-209 y 260 de 2023, e igualmente, que la Secretaría del Juzgado, frente a la cual hubo cambio de secretario a mitad de febrero de este año, está en labores de organización para el trámite de los procesos, clasificación de la carga activa, y depuración de archivos tanto físicos como digitales, con ocasión a la restante digitalización del Juzgado frente expedientes anteriores a este pendiente por tramitar, atendiendo que entre los días 1º al 16 de junio de 2.023 la Secretaría del Juzgado estuvo trabajando 100% en la adecuación de los 73 expedientes que se remitieron al Juzgado 16 Laboral del Circuito de esta ciudad en virtud de la medida de redistribución de procesos del Acuerdo CSJATA23-227 de 2023, lo que permitió el envío físico y digital de los expedientes el 16 de junio de 2.023, y también, le pongo de presente que debido a algunas devoluciones que realiza la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla por carecer de gestor, el Juzgado también se encuentra realizando tareas de creación de expedientes digitales en dicha plataforma, lo que ha resultado más dispendioso de lo esperado por la complejidad del aplicativo. Sírvese proveer.

Barranquilla, 24 de julio de 2023

MARIA B. POTES SANTODOMINGO.
Secretaria.



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA
JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA.
Barranquilla, veinticuatro (24) de julio de dos mil veintitrés (2.023).

Visto el informe secretarial que antecede y revisado el expediente, procede el Despacho a resolver el recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto por las partes contra el auto mediante el cual se ordenó librar mandamiento de pago en favor del demandante contra las demandadas, proveído en el que también se abstuvo de decretar la medida cautelar deprecada, notificar personalmente a la demandada y correrle traslado por el término de 10 días de la solicitud de cumplimiento de sentencia.

Sea lo primero señalar, que el artículo 63 del C.P.T.S.S., dispone que el recurso de reposición: "... se interpondrá dentro de los dos días siguientes a su notificación cuando se hiciere por estado...". Luego, en consideración a que el auto recurrido ordenó la notificación de ese proveído a la parte ejecutada personalmente, de conformidad con el artículo 306 del C.G.P., aplicable por integración normativa en materia laboral (artículo 145 C.P.T.S.S.), y se constata que el auto del 31 de agosto de 2022 se notificó por estado el 2 de septiembre del mismo año a la parte demandante, quien interpuso el recurso el día 5 de septiembre de 2.022, atendiendo que los días 3 y 4 de septiembre de 2022 eran sábado y domingo, respetivamente, se entiende que fue interpuesto dentro del término legal.

En cuanto a las ejecutadas, se observa que a pesar de no haberseles notificado personalmente el auto que libró mandamiento de pago, la ejecutada **DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES DE BARRANQUILLA**, el día 6 de septiembre de 2022, a través de apoderado, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la aludida providencia, mientras que el **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL y PORTUARIO DE BARRANQUILLA** también interpuso tales recurso el día 13 de septiembre de 2.022, lo que pone de presente que las demandadas se notificaron por conducta concluyente del mandamiento de pago en los términos del artículo 301 del CGP, lo que así se declarará, y por tanto, los mencionados recursos interpuestos por las demandadas también son oportunos.

Ahora bien, la parte demandante aduce en su recurso que el Despacho no estableció el valor o la suma de dinero o suma numérica precisa que deben pagar las accionadas por el período comprendido entre el 12 de julio de 2009 y el 31 de octubre de 2018, lo cual dificulta e impide obtener el pago de la obligación. Considera que, al no establecerse una cifra numérica, dificulta la ejecución, la imposición de medidas cautelares, la liquidación del crédito y el recaudo del crédito. Además, en su escrito reclama los intereses moratorios manifestando que estos tienen una fuente jurídica diferente a las sentencias proferidas a favor del demandante, que no es indispensable ni obligatorio que los intereses de mora estén ordenados en la sentencia que constituyan el título ejecutivo, por cuanto en el presente caso han pasado años sin que la entidad demandada haya pagado el retroactivo pensional adeudado y que en virtud de los arts. 307 de la Ley 1564 de 2012 y 192 de la Ley 1437 de 2011 (que reemplazó al art. 177 del Decreto 01 de 1984 anterior CCA), la entidad tenía 10 meses para realizar las apropiaciones presupuestales para pagar y que los intereses nacen por mandato legal, por un hecho posterior. Finalmente, sustenta su inconformidad por la negación del embargo y secuestro de bienes, ya que considera que la inembargabilidad de los bienes del Estado y particularmente de los municipios, no es una garantía absoluta sino relativa ya que en el presente caso las accionadas no han incluido en sus presupuestos de ingresos y gastos el pago de la sentencia de este proceso, y que los créditos laborales reconocidos a los trabajadores que emanan de una sentencia judicial ejecutoriada, son privilegiados y prevalecen sobre la inembargabilidad.



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Frente a lo anterior, es de recordar, que en este asunto aún no se ha ordenado seguir adelante la ejecución ni se ha liquidado el crédito, y en ese orden de ideas, sobre el mandamiento de pago objeto de reparo, el artículo 430 del CGP (Art.145 CPTSS), dispone al respecto: “MANDAMIENTO EJECUTIVO: (...) Los requisitos formales del título ejecutivo solo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia contra los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. (...)”

En el auto de fecha 31 agosto de 2022, este Despacho Judicial ordenó librar mandamiento de pago a favor del demandante, SALVADOR SUAREZ DIAZ, y en contra de las demandadas DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL y PORTUARIO DE BARRANQUILLA y DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES DE BARRANQUILLA, por concepto de la de pensión proporcional de jubilación convencional a partir del 12 de julio de 2009, en cuantía de \$2.408.117 con sus incrementos legales anuales y mesadas adicionales, concretamente el retroactivo pensional causado entre el 12 de julio de 2.009 a octubre de 2.018, el reajuste de la indemnización por despido convencional en cuantía de \$393.720,57 que deberá indexarse con soporte al índice de precios certificados por el DANE, más las costas procesales de Primera y Segunda Instancia, así como en sede de casación de las que resulta un total de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$10.624.968.00).

Revisado el expediente se observa que dicho mandamiento tiene como fuente, las sentencias de primera y segunda instancia proferida dentro del proceso ordinario que antecede al presente ejecutivo, por el que fue librado entre otros conceptos, por una suma determinada de dinero, esto es la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (\$10.624.968.00), lo cual se desprende de la providencia del 31 de agosto de 2.022, (en concordancia con el proveído del 15 de enero de 2.019-aprobación de costas-), tomando los valores expresamente señalados en las sentencias de primera y segunda instancia, tal como lo dispone el artículo 306 del CGP (Art.145 CPTSS), que preceptúa:

“Artículo 306. EJECUCIÓN. Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. **Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutive de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas**, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior.(...)” *(Subrayas y negrillas fuera del texto).*

Lo anterior implica que el mandamiento de pago está sujeto a lo señalado en la parte resolutive de la respectiva sentencia y las costas aprobadas, por lo que a todas luces lo alegado por la ejecutante carece de sustento dado que en las sentencias que sirven de título de recaudo ejecutivo consisten en “pagarle al demandante una pensión proporcional de jubilación convencional a partir del 12 de julio de 2009, en cuantía de \$2.408.117 con sus incrementos legales anuales y mesadas adicionales, concretamente el retroactivo pensional causado entre el 12 de julio de 2.009 a octubre de 2.018, el reajuste de la indemnización por despido convencional en cuantía de \$393.720,57 que deberá indexarse con soporte al índice de precios certificados por el DANE, más las costas procesales de Primera y Segunda Instancia, así como en sede de casación de las que resulta un total de \$10.624.968.00”.



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

En cuanto a lo alegado por la parte demandante, respecto a que no se incluyeron en el mandamiento de pago los valores correspondientes a los intereses de mora, los cuales a su juicio son exigibles automáticamente por la mora en el pago de la obligación contenida en las sentencias judiciales, resulta pertinente traer al caso mutatis mutandi lo manifestado por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia del 27 de marzo de 2.007, Radicación No 76001-23-31-000-2000-02513-01(IJ), Consejero Ponente: Jesús María Lemus Bustamante, cuando al referirse a la sanción moratoria establecida en la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006, esgrimió:

“(...) la obligación debe reunir los requisitos previstos en los artículos 100 y siguientes del Código Proceso Laboral y de la Seguridad Social, esto es, ser expresa, clara, exigible y constar en documento que provenga del deudor o de su causante pues el fundamento del proceso ejecutivo es la certeza sobre la existencia de la obligación.

Para que exista certeza sobre la obligación no basta con que la ley haya dispuesto el pago de la sanción moratoria, aquella es la fuente de la obligación a cargo de la administración por el incumplimiento o retardo en el pago de las cesantías definitivas mas no el título ejecutivo, que se materializa con el reconocimiento de lo adeudado por parte de la administración.

En este caso el interesado debe provocar el pronunciamiento de la administración para obtener el acto administrativo que le sirva de título ejecutivo ante la Jurisdicción Laboral (...)” <Negrilla y subraya fuera de texto>.

Postura que reiteró la misma Corporación en su Sección Segunda Subsección B, en providencia del 27 de julio de 2.016, Radicación No 25000234200020140217701 (5021 – 2015), Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, al dejar por sentado que:

“(...) Para que haya certeza sobre la obligación no basta que la ley disponga el pago de la sanción moratoria, ya que ella es la fuente de la obligación a cargo de la administración por el incumplimiento o retardo en el pago de las cesantías definitivas pero no el título ejecutivo, el cual se materializa con el reconocimiento de lo adeudado por parte de la administración. Por tanto, el interesado debe provocar el pronunciamiento de la administración para obtener el acto administrativo de reconocimiento de la sanción moratoria reclamada y de esa manera, adquirir un título que pueda ser ejecutado ante la jurisdicción ordinaria laboral, o en su defecto, recibir una negativa de la administración frente al pretendido derecho reclamado, decisión que será susceptible de cuestionarse en su legalidad ante esta jurisdicción.”
<Negrilla y subraya fuera de texto>.

Del audio que contiene la sentencia de primera instancia así como de la lectura de la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla e incluso de la lectura de la sentencia de casación proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se puede constatar que en ninguna de las instancias se impuso condena contra las demandadas por los intereses moratorios a los que se refiere la recurrente, por lo que las sumas que pretende se incluyan en el mandamiento por este concepto, no pueden ser incluidas debido a que no se encuentran integradas al título ejecutivo (sentencias judiciales), al no proceder tampoco de manera automática los intereses de mora, motivo por el cual carece de asidero lo argüido por la parte demandante en su recurso.

Similar acontece en lo que tiene que ver con su inconformidad con el auto objeto de recurso que se abstuvo de decretar medidas cautelares al alegar que la inembargabilidad de los bienes del Estado y particularmente de los municipios, no es una garantía absoluta sino relativa y que en el presente caso las demandadas no han incluido en sus presupuestos de ingresos y gastos el pago de la sentencia en este proceso, por la potísima razón, en primer lugar, que tales reparos difieren del derrotero que fija el aludido artículo 430 del CGP frente aquello que debe ser atacado vía reposición al mandamiento de



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

pago, y esta inconformidad no hace parte de las hipótesis que plantea esta norma. Además, en todo caso, nótese e igualmente, se precisa, que el motivo por el cual el Juzgado se abstuvo de decretar las medidas cautelares deprecadas, es porque conforme a lo que dispone el artículo 2º de la Ley 1617 de 2013 por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales, dispone que “las disposiciones de carácter especial prevalecerán sobre las de carácter general que integran el régimen ordinario de los municipios y/o de los otros entes territoriales; pero en aquellos eventos no regulados por las normas especiales, o que no se hubieren remitido expresamente a las disposiciones aplicables a alguno de los otros tipos de entidades territoriales, previstas en la Constitución Política, la ley, ni a las que está sujeto el Distrito Capital de Bogotá, estos se sujetarán a las disposiciones previstas para los municipios”, y en ese entendido como esta Ley no regula lo concerniente a las medidas cautelares que se soliciten contra los Distritos Especiales, se impone la remisión a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012, que señala: “En los procesos ejecutivos en que sea parte demandada un municipio solo se podrá decretar embargos una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución”, tal como fue señalado en la providencia que se recurre, por lo que, al no encontrarse ejecutoriada la providencia que ordene seguir adelante la ejecución en este asunto, pues solo se libró mandamiento de pago, en conclusión no se repondrá la decisión del Juzgado respecto al recurso interpuesto por la parte demandante.

Por su parte, La DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES DE BARRANQUILLA tiene dos motivos de inconformidad, primero expresó no estar de acuerdo con la liquidación de mesadas de retroactivo efectuada ya que la liquidación por ellos realizada arroja una suma inferior a la señalada en el mandamiento de pago que fue liquidado hasta octubre de 2018, mientras que la liquidación ahora aportada está liquidada hasta julio de 2022 y que el señor SALVADOR SUAREZ DIAZ ingresó en nómina en noviembre de 2018, según Resolución No. 270 de 2018, por lo que solicita que se modifique el valor de las mesadas retroactivas. En segundo lugar, se encuentra inconforme pues, si bien no se libraron medidas cautelares no se aclaró que tampoco serían libradas más tarde.

Sobre el primer tópico, se le indica a la parte que no es la oportunidad de proponerlo, ya que la oportunidad para ello es en la liquidación y aprobación del crédito, una vez se encuentre ejecutoriado el auto que ordena seguir adelante con la ejecución, y en cuanto al segundo motivo de inconformidad, no recae sobre una decisión que ya hubiera sido proferida por este Juzgado, pues se duele de una situación que aún no se dado, como es el librar medidas de embargo y secuestro en contra de esa entidad, por lo que tampoco hay lugar a reponer la decisión del Juzgado.

En cuanto al DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en su recurso sostiene que, dado que el actor no se presentó al proceso liquidatorio de la EDT, carece de facultad para cobrar, debiendo esperar a que el proceso liquidatorio culmine y perseguir el remanente, si lo hubiere. Por otra parte, alegó la falta de exigibilidad del título ejecutivo, por no haber transcurrido los 10 meses que señala la ley para ejecutar la sentencia contra un municipio y por último, manifiesta que, no es el momento procesal para decretar medidas cautelares, aspecto último sobre lo cual ya este Despacho se pronunció, en donde resulta claro que en ningún momento se han decretado medidas cautelares en este proceso.

Sobre el primer y segundo motivo de inconformidad de la entidad distrital, es de recordar lo ya expuesto en el auto objeto de recurso, mandamiento de pago del 31 de agosto de 2022, en el que se esgrimió que: “(...) aunque en la sentencia que profirió este Juzgado el día 21 de octubre de 2011 se “declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación frente al DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA y en consecuencia lo absolvió de las pretensiones de la



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

demanda”, condenando únicamente a la DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES en la forma antes indicada, decisión que fue confirmada en segunda instancia, no es menos cierto que la aludida Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad dejó consignado en su fallo lo siguiente: “(...)el inicial obligado a asumir el pasivo de la EDT, era el Municipio de Barranquilla, el cual con posterioridad entregó tal asunción a la Dirección Distrital de Liquidaciones a través del Decreto 0169 de 2.006, y supeditó volver a asumirlo a dos circunstancias: (i) hasta tanto tenga lugar la terminación de la vigencia del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del Distrito de Barranquilla y (ii) Hasta cuando se agoten los recursos de la Dirección Distrital de Liquidaciones necesarios para garantizar el cubrimiento del pasivo pensional de la EDT (...) En rigor, con la condena a la DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES, no se impide, que si al momento de exigir el cumplimiento de la presente sentencia, ésta no posee los recursos necesarios para solventar la presente obligación, no pueda llamarse a responder al DISTRITO DE BARRANQUILLA, por cuanto éste sujeto de derecho público será responsable de pleno derecho para sumir dicha obligación pero solo y exclusivamente bajo tal condición”, decisión que a su vez como se dijo no fue casada por la citada Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por lo que ese orden de ideas, como el Decreto 169 de 2.006, impuso a cargo del DISTRITO DE BARRANQUILLA la obligación de asumir los pasivos pensionales y demás obligaciones a cargo de la extinta EMPRESA DISTRITAL DE TELECOMUNICACIONES DE BARRANQUILLA, en los eventos que señala y a los cuales expresamente se refirió el Tribunal, de los cuales es público conocimiento que el Ministerio de Hacienda mediante comunicación del 24 de 2.018 informó que el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del ente distrital en comento finalizó el 31 de diciembre de 2.017, y que se ha informado en este caso por parte de la DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES que no dispone de los recursos para el pago total de las obligaciones contenidas en las citadas sentencias que figuran como título base de recaudo ejecutivo, pese a no haber sido expresamente condenado el DISTRITO DE BARRANQUILLA como se explicó, se evidencia que si se contempló el evento en que respondería por tal condena, y al haber transcurrido el término de 10 meses señalados en el artículo 307 del C.G.P, no existe impedimento legal alguno para también librar mandamiento de pago en su contra por los mismos conceptos.” Postura que no ha de cambiar este Despacho Judicial al no haber argumento suficiente que la hiciera variar, máxime cuando tal inconformidad que trata contra lo ya resuelto en el proceso ordinario debió plantearse oportunamente en el transcurso de este y no esperar al cumplimiento de la sentencia o proceso ejecutivo para ello.

Además, respecto a la alegada falta de exigibilidad del título judicial por no haber transcurrido los 10 meses que señala la Ley para ejecutar la sentencia contra un ente territorial, claramente dicho término ha transcurrido conforme se dejó consignado con antelación, recuérdese que el auto de obedecer y cumplir lo resuelto por el Superior tiene fecha de 3 de octubre de 2018, notificado el 9 de octubre del mismo año, y el auto que dispuso librar mandamiento de pago está fechado 31 de agosto de 2022, es decir, se itera, habían transcurrido más de los 10 meses que exige la norma cuando la ejecutada se trata de un ente territorial.

De conformidad con las anteriores consideraciones no hay lugar a reponer el auto calendado 31 de agosto de 2.022 que libró mandamiento de pago y se abstuvo de decretar las medidas cautelares deprecadas contra la demandada.

Como quiera que también que las partes interpusieron en subsidio el recurso de apelación contra el aludido auto, el mismo por ser procedente y oportuno conforme al numeral 7º y 8º del artículo 65 del CPTSS, modificado por la Ley 712 de 2001, artículo 29, en armonía con el artículo 321 del C.G.P. (Art.145CPTSS), se concederá ante la



JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en el efecto suspensivo.

Por último, con relación a la contestación de la petición de cumplimiento de sentencia y las excepciones propuestas por la parte demandada, se le impartirá el trámite correspondiente, una vez se defina por el Superior lo concerniente al auto objeto de recurso.

En mérito a lo expuesto, el Juzgado,

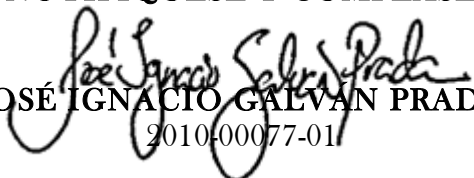
RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER el mandamiento de pago de fecha 31 de agosto de 2.022, por los motivos antes expuestos.

SEGUNDO: CONCEDER en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de la parte demandante SALVADOR SUAREZ DIAZ y demandada DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL y PORTUARIO DE BARRANQUILLA y DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES DE BARRANQUILLA, contra el auto de fecha 31 de agosto de 2.022, por medio del cual se libró mandamiento de pago y se abstuvo de decretar las medidas cautelares deprecadas contra la demandada. En consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EL JUEZ,


JOSÉ IGNACIO GALVÁN PRADA
2010-00077-01

Juzgado 13 Laboral Del Circuito de Barranquilla
Día 26 Mes 07 Año 2023
Notificado por el Estado N° 0108
La Providencia de fecha Día 24 Mes 07 Año 2023
La Secretaria María B. Potes Santodomingo